

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4559-2022
CARATULADO : REVECO/FISCO DE CHILE - CDE

Santiago, seis de Junio de dos mil veinticuatro

VISTOS:

En el folio 1 de estos antecedentes, comparece César Antonio Barra Rozas, abogado, en representación de **Carlos Segundo Reveco Muñoz**, pensionado, con domicilio en calle Blanco N° 1663, oficina 1001, Valparaíso, quien interpone demanda ordinaria de indemnización de perjuicios en contra de **Fisco de Chile**, representado por Juan Antonio Peribonio Poduje, con domicilio en Agustinas N°1225, 4° piso, Santiago.

Señala el actor que el 17 de diciembre de 1973, siendo las 09.00 horas, en su domicilio ubicado en la comuna de Quinta Normal en ese entonces, un jeep de carabineros con tres personas de civil preguntando por el actor, quien al identificarse le dicen que tienen que acompañarlos porque algo tiene que declarar. Así, es conducido hasta la Séptima Comisaría de Carabineros ubicada en la calle Herrera entre las calles Santo Domingo y Catedral, ingresando hasta las 21.45 horas en un calabozo en calidad de sospechoso. Al salir del lugar, dos sujetos que se encontraban en un auto Peugeot color amarillo, cuatro puertas, se abalanzan sobre él y lo empujan a la parte trasera del auto, tendiéndose en el suelo. Uno de ellos se sienta atrás y pone sus pies en su espalada.

Tras el traslado que hace el vehículo, lo bajan donde es recibido con una lluvia de golpes y patadas; luego lo lanzan al suelo, donde siente toser a otra persona; y el llanto de otra. Pasó mucho rato en el lugar, hasta que lo colocaron de pie, pusieron sus manos en la espalada u le condujeron hacia otro vehículo, un camión de carga al parecer, donde lo trasladaron nuevamente. Al bajar, es recibido nuevamente con golpes de puño, patadas e improperios.

Subieron a un segundo piso por una escalera de madera, donde es obligado a sentarse en una silla de madera, con sus tobillos amarrados con cuerdas plásticas a las patas delanteras de la silla. Dice que escuchaba las agresiones a otros detenidos, momento en que pidió agua, la que le fue negada.

Al día siguiente, dice que le hacen sentar en un piso, donde antes de preguntar, le golpean en el pecho y se va de espaldas al suelo, volviéndolo a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

sentar en el piso. En ese entonces, un sujeto de voz ronca le pregunta “dónde estaban las armas, respondiendo que no sabía de qué le hablaba, a lo que recibe golpes en la cabeza y las rodillas. Al repetir la pregunta, le golpean en el pecho y le dieron una serie de patadas, pregunta que es reiterada y los golpes aumentan en intensidad. Acto seguido, le preguntan por personas que no conoce, momento en que lo golpean desmayándose, siendo sacado apenas del cuarto en que estaban.

Al día siguiente, lo sientan en un sillón, donde siente el pinchazo con un objeto bajo la uña de su mano derecha, entregando un nombre de una persona que le ofreció trabajo en Socoagro, aclarando que era del Partido Socialista, que su rol era pintar murallas.

Tres días después, expone que le quitaron la ropa, extendiéndolo en una cama metálica, donde sintió el chirrido de la manivela del magneto y la picana en sus genitales, donde se le soltó la mandíbula y se mordió la lengua. Agrega que no le dieron agua y que se orinó tras días sin poder hacerlo.

Al día siguiente lo ubican en una silla metálica, donde sus nalgas quedaron expuestas y en las que le introdujeron una picana en su ano, volviendo a hacerle preguntas. Sintió corriente en el ano, lo que provocó que defecara.

Agrega que comenzó a perder la noción del tiempo, con la sensación que un balazo en su cabeza terminaría con su sufrimiento. En ese contexto, dice que en una oportunidad le invitan a arrancarse, a lo que se negó, donde recibió un golpe que le hizo un corte en su cabeza, a lo que se le colocó un periódico con cinta adhesiva para terminar con el sangrado.

Más adelante, conducido con un vestón en la cabeza lo hacen ingresar a una oficina donde le ordenan firmar unos papeles en la mesa. Tenía cinta que cubría sus ojos, los que tenían legañas e infección; luego le hacen caminar con las manos amarradas hacia el primer piso, donde puede ver que se encuentra cerca de la Iglesia de San Francisco, esto es, en la calle Londres N°38.

Lo hacen subir a un camión don destino incierto, haciéndolos bajar en la calle Politeama, donde ve barreras y mucha gente gritando nombres, entre ellos divisa a su esposa y no puede contener sus lágrimas. Lo hacen ingresar aun recinto donde ve que tenía dos hojas tamaño oficio colgadas al cuello, donde le sueltan las manos y o conducen a una cancha de básquetbol, donde finalmente lo conducen hacia un sector en que una persona le cedió una colchoneta para situarse en ese lugar. Consultó con otra persona, y tomó conocimiento que era 27



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

de enero de 1977, habiendo permanecido 39 días en Londres N°38. En ese momento, lo atendió una persona con bata blanca, quien le dice que tiene infección y pus en un dedo pulgar, padece de neumonía y le inyecta penicilina, para luego pedirle que se bañara, siendo asistidos por dos personas.

Así las cosas, estuvo en aquél lugar – Estadio Chile- por 33 días, pues el 1 de marzo de 1977, fue trasladado a la Segunda Fiscalía Militar y el fiscal señor Aguilar le lee los cargos, aplicándosele la ley de control de armas. Luego es traslado a la cárcel pública de Santiago, donde estuvo 45 días incomunicado y luego declarado en libre plática. El 16 de abril de 1977 pasó a la unidad de presos políticos, donde pudo ser visitado por su cónyuge, quien le contó del allanamientos a su domicilio, pese al hecho que se encontraba embarazada, dando a luz el 16 de junio de ese año.

El 8 de septiembre de 1977 es trasladado a la penitenciaría de Santiago, donde permaneció hasta el 21 de enero de 1975 (sic), siendo trasladado a un lugar llamado Cuatro Álamos, donde permaneció hasta el 20 de febrero de 1975.

De ahí es trasladado a unas cabañas usadas como recinto de prisioneros – antes cabañas de verano- en Puchuncaví, donde les despertaban con ruidos de disparos de metralletas, simulacros de intento de fuga o asaltos al recinto.

Da cuenta que el 25 de julio de 1975 le ordena recoger sus costas, donde le hacen transportar, volviendo a Cuatro Álamos, donde finalmente le colocan en libertad. Agrega que su cónyuge le esperaba, quienes al verse se abrazan y lloran. Más adelante, le hacen firmar unos papeles en la Segunda Fiscalía Militar.

Finalmente, indica que por carta de la Vicaría de la Solidaridad, le acepta recibir a él y a su familia el gobierno de los Estados Unidos, llegando a su poder los pasajes el 16 de marzo de 1976, embarcándose a Los Ángeles, California, iniciándose con ello su exilio.

En cuanto al derecho, cita los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de La República; 2, 4 y 44 de la Ley 18.575, además de jurisprudencia, en la que resalta que el fundamento de la acción deducida es precisamente responsabilidad del Estado, que es de orden público, amparando sus fundamentos en vasta doctrina y jurisprudencia.

Asimismo, califica los hechos como un crimen de lesa humanidad, citando normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de Los Tratados, Estatuto de la Corte Penal Internacional, jurisprudencia y doctrina.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

A continuación, sostiene la imprescriptibilidad de la acción, bajo jurisprudencia que se ha pronunciado sobre el particular.

En otro apartado, refiere al daño moral sufrido, cuestión que ha padecido el actor dadas las vejaciones, torturas físicas y psicológicas sufridas, por lo que es procedente su indemnización.

Pide que se acoja la demanda, condenando al demandado a pagar al demandante la suma total de \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos), más intereses y reajustes legales, con costas; o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero, y/o prestaciones, que el tribunal estime de justicia y equidad, de acuerdo al mérito de autos, debidamente reajustadas y con intereses que el tribunal estime procedentes, con costas.

En el folio 9, la parte demandada compareció, contestando la acción deducida.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, toda vez que la demandante ya fue indemnizado. Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por transgresión a los derechos humanos debe comprenderse desde el punto de vista jurídico nacional e internacional, con la llamada Justicia Transicional. Añade que uno de los pilares en los cuales descansa esta justicia es en el dilema denominado justicia versus paz, y que tiene como fundamento la necesidad de un país tranquilo que mira sus errores del pasado y con ello pronunciarse sobre el nunca más. Indica que a su vez no debe olvidarse desde la perspectiva de las víctimas la reparación de los daños sufridos, el que juega un rol importante en el reconocimiento de la medida de la justicia buscada por tantos años.

Refiere que las negociaciones entre el estado y las víctimas demuestran que toda reparación es una decisión compleja de destinar recursos económicos públicos que satisfagan ciertos tipos de necesidades públicas a otras radicada en grupo de personas más específicos. Dichos intereses se muestran normalmente en la diversidad de contenidos que se proponen como programa de reparación en las Comisiones de Verdad o Reconciliación. Estos programas incorporan beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otros análogos diversos que se remiten a la entrega de una cantidad determinada de dinero y que atendida la complejidad de estas negociaciones, muchas veces se privilegia a algunos grupos por sobre otros o se compensen ciertos daños y se dejen de lado otros o simplemente estos se fijan por vía legal, luego de un acuerdo público.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

Sostiene que durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en relación a la justicia transicional, se arribó a tres objetivos principales, los cuales eran a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse. Indica que respecto al segundo objetivo, la Comisión de Verdad y Reconciliación, llamada Comisión Rettig en su informe final, planteó una serie de propuestas de reparación, dentro de las cuales estaba la “pensión única de reparación para los familiares directo de las víctimas”, y algunas prestaciones de salud. Señala que dicho informe originó la dictación de la Ley N° 19.123 mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, siendo el mensaje principal del proyecto de esa ley, el buscar la reparación precisamente del daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Señala que la idea reparatoria se plasmó de forma clara en la ley mencionada, estableciéndose distintos mecanismos a través de los cuales se ha concretado esta compensación, y que esta se ha materializado mediante tres formas; a) reparaciones a través de transferencias directas de dinero, b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y c) reparaciones simbólicas. Agrega que a través de aquellas se ha cumplido con el objetivo del proceso de justicia transicional, el que busca precisamente la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En relación a lo anterior, indica que se ha establecido la reparación mediante transferencias directas de dinero, en las que además se incluyó a las personas víctimas de apremios ilegítimos, destacando que la legislación dispuesta al efecto enfrentó dos posiciones que tenían que ver con la entrega de una suma de dinero o bien con una pensión vitalicia, y que en ambos casos los fines eran innegablemente resarcitorios.

Profundiza en los costos generales que ha significado para el Estado por este tipo de indemnizaciones.

Señala que respecto a la pensión mensual, también es una forma de reparar el perjuicio, y el cálculo para efectos indemnizatorios se efectúa sumando las cantidades que ya se han pagado bajo ese criterio, adicionando las mensualidades que se deben pagar en el futuro, y con ello es posible apreciar el alto impacto que estas han tenido.



«RIT»

Foja: 1

Manifiesta que en cuanto a las reparaciones específicas establecidas en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, la demandante ha recibido beneficios pecuniarios bajo dicha ley, toda vez que en ella se estableció una pensión anual de reparación, además de otorgar otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos en el anexo listado de prisioneros políticos y torturados de la nómina en la cual se le ha reconocido como víctima. Señala que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años, de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 años o más y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años. Asimismo indica que la actora recibió recientemente el Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874 por el monto de \$1.000.000.

Refiere sobre las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, y de la Ley N° 19.992 se les concedió el derecho a la gratuidad en las prestaciones médicas, dadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en los Servicios de Salud del país, el que se accede concurriendo al hospital o consultorio de salud correspondiente al domicilio del beneficiario, e inscribiéndose en la oficina del PRAIS pertinente.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también obtienen el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIA en la difusión del programa y la promoción del resto de los Derechos Humanos, ofreciéndoles apoyo técnico y rehabilitación física. Refiere que de igual forma se incorporaron beneficios educacionales, consistentes en la continuación de los estudios básicos, medios y superiores de manera gratuita, el que además se traspasa a sus hijos o nieto en caso de no utilizarse. Por último también se les ha entregado beneficios en vivienda a través de subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de Derechos Humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio. En el mismo sentido refiere que diversas sentencia han resuelto, que el propósito de las leyes dictadas respecto de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de estas, lo que es congruente con las resoluciones emanadas de Tribunales Internacionales respecto a la improcedencia de la indemnización

Expresa que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estados por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades. Por los motivos esgrimidos opone la excepción de reparación satisfactiva toda vez que la demandante ya ha sido indemnizada.

En subsidio, opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 del Código Civil, toda vez que la demandante en su presentación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

señala que la detención ilegal, y tortura y prisión política sufrida ocurrió en 1975, aunque no existe claridad en la fecha conforme a lo señalado en la demanda. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone dicha excepción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2.332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2.497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso la demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando la demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguna de ella se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por la actora es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y Excelentísima Corte Suprema que ha resuelto bajo ese argumento.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por la demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirán percibiendo a título de pensión, así como también los beneficios extramatrimoniales, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil instaure de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

En el folio 13, la parte demandante, al evacuar el trámite de réplica, ratifica lo expuesto conforme a los fundamentos de hecho y de derecho.

En cuanto a la excepción de reparación integral, cita sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en miras a refutar dicho argumento.

Por su parte, en cuanto a la excepción de prescripción extintiva, se apoya en la misma sentencia para considerar que la acción es imprescriptible.

A continuación, se basa en jurisprudencia nacional, lo que le permite concluir la imprescriptibilidad de la acción, además que se consagra a nivel constitucional el derecho a la reparación de los perjuicios sufridos.

En el folio 15, al evacuar el trámite de la dúplica, la parte demandada insiste en la excepción de reparación integral, que se fundamenta en el hecho que el Estado de Chile adoptó una política de reparación integral tanto en dinero, beneficios de salud y construcción de memoriales, y por eso es integral y no una sola denominación como se pretende sostener. De este modo, si se considera todo lo que significa lo anterior en gastos para el Estado y la sociedad en su conjunto, resulta claro que persiguió reparar el daño moral y al ser aceptada esta pensión por el demandante, aceptó el monto y las condiciones de esta reparación del daño moral sufrido, de modo que no se pueden desconocer sus efectos. Esto fue recogido en el fallo Domic Bezic, Maja con Fisco.

Por otro lado, se basa en jurisprudencia para dar cuenta de la prescripción extintiva conforme a las normas del Código Civil

Finalmente, reitera los fundamentos que refutan la aplicación de intereses y reajustes.

En el folio 16, con fecha 31 de agosto de 2022, se recibe la causa a prueba.

Finalmente, en el folio 32, de fecha 23 de mayo de 2023, se citó a las partes para oír sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio N°1, la parte demandante dedujo demanda en juicio de hacienda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, solicitando tenerla por interpuesta, acogiéndola a tramitación y en definitiva que se le condene al demandado al pago de \$300.000.000, más reajustes e intereses, conforme a los fundamentos vertidos en la parte expositiva precedente.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que a folio N° 9, comparece doña Carolina Vásquez Rojas, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasó a exponer.

Argumenta su defensa, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

TERCERO: Que a folio N° 13, comparece la parte demandante, evacuando dentro de plazo legal la réplica, mediante la cual reitera íntegramente lo expuesto en la demanda, y agregando además otras argumentaciones.

Fundamenta su réplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran presentados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por absolutamente reproducidos para todos los efectos legales.

CUARTO: Que a folio N° 15, comparece la parte demandada, quien estando dentro de plazo legal, evacúa la dúplica, ratificando todas las argumentaciones efectuadas en la contestación.

Basa su dúplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran enunciados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por totalmente por reproducidos para todos los efectos legales.

QUINTO: Que, en el folio N° 16, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales iba a versar, los siguientes:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

1° Efectividad que el actor sufrió detención, prisión ilegal, torturas y/o apremios ilegítimos ejercidos por parte del demandado o sus dependientes. Época y circunstancias.

2° De ser efectivo el punto anterior, si dicha conducta constituye una acción u omisión ilícita cometida con culpa o dolo por parte del demandado o sus dependientes. Hechos y circunstancias.

3° Efectividad que el demandante sufrió los daños o perjuicios señalados en el libelo. Naturaleza, especie y monto de los mismos.

4° Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.

5° Efectividad de haber operado la reparación integral, por haberse indemnizado al demandante por los hechos que demanda.

6° Efectividad de encontrarse prescrita la acción. Hechos y circunstancias.

SEXTO: Que la parte demandante generó la siguiente prueba no objetada de contrario en orden a acreditar los fundamentos de sus pretensiones:

Instrumental:

En folio 13:

1.- Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2018, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile.

En el folio 23:

1. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N°16914-2018 de fecha 27 de Septiembre del año 2018.

2. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N°17010-2018 de fecha 20 de Septiembre del año 2018.

3. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 29454-2018 de fecha 24 de Diciembre del año 2018.

4. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 17710-2019 de fecha 24 de Octubre del año 2019.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

5. Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, de fecha 23 de septiembre de 2016.

6. Copia simple de informe emanado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic)

7. Copia simple de informe emanado por la O.N.G. ILAS, agosto 2016.

En el folio 24:

1- Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura, capítulos seleccionados.

2- Nómina donde consta que el actor se encuentra en el informe comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo el N° 20.231

3- Certificado detención de don Carlos Segundo Reveco Muñoz, precisando que el actor permaneció detenido entre el mes de diciembre de 1973 a enero de 1975, la que se procedió conforme a las facultades del Estado de Sitio de la época. Finalmente, agrega que fue puesto en libertad conforme a Decreto Exento N° 1309 de 14 de julio de 1975 del Ministerio del Interior.

4- Protocolización copia informe Psicológico de don Carlos Segundo Reveco Muñoz, de fecha 5 de enero de 2023.

Consta en el antecedente que el informe fue elaborado el 12 de septiembre de 2022, que resume el relato entregado en la demanda, lo que implicó que estuviera preso por dos años, hecho que ocurrió el 17 de septiembre de 1973, recuperando su libertad en 1975, para luego partir a un largo exilio con su familia en 1976.

Posterior a estos hechos, señala que fue ayudado por chilenos residentes en dicho país, a fin de acostumbrarse, pero señala que fue muy duro y difícil de empezar una nueva vida, sufriendo de insomnio crónico, fobias y temores, sumado al hecho que los recuerdos no le dejaban dormir. Dice que veía uniformados y que le daban ganas de esconderse, por lo que se refugió en el alcohol, perdiendo el trabajo y complicando su entorno familiar y más cercano. Indica que volvió al país después de 36 años (2012).

El antecedente consigna también que, dada su avanzada edad (80 años), es muy difícil este ejercicio, por cuanto tienden a bloquear recuerdos traumáticos, además que su cónyuge padece de *alzheimer* y en él se aprecia un deterioro



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

evidente en sus facultades en el ámbito emocional, físico y psicosocial, producto de las torturas recibidas.

SÉPTIMO: Por su parte, la demandada ofreció y rindió el siguiente medio de prueba:

En el folio 27:

1- Oficio ORD. **DSGT N° 4792-10925** emitido por el Instituto de Previsión Social, con fecha 28 de diciembre de 2022, mediante el cual informa los beneficios de reparación de las leyes N°s 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874, recibidos por Carlos Reveco Muñoz, demandante de autos.

En este antecedente, se consigna que ha recibido las siguientes sumas:

- a) \$35.387.785.- por concepto de pensión Ley 19.992;
- b) \$1.000.000.- por concepto de aporte único Ley 20.874.-
- c) \$552.774.- por concepto de aguinaldos.

Lo anterior hace un total de \$36.940.559.-, con una pensión actual de \$263.264.-

I-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL:

OCTAVO: Que, en primer término, corresponde resolver la alegación opuesta por la demandada, y que dice relación con la reparación integral del actor destinadas a enervar la acción indemnizatoria por daño moral pretendida, fundada en los beneficios de los que ha recibido el demandante conforme a las leyes 19.123, 19.992 y 20.874.

Ha acompañado como antecedente el documento refrendado en el considerando precedente, en el que consta que el actor ha recibido las prestaciones que se indican.

NOVENO: Que, en el contexto político vivido a nivel nacional entre los años 1973 y 1990, el artículo 1 de la Ley N°19.123 dispone la creación de la “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago”.

Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

Nº 355, de 25 de abril de 1990, y las demás funciones señaladas en la presente ley”.

En ese sentido, una de las finalidades de la aludida Corporación, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la citada ley consiste en “*Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley*”, recayendo en las personas consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley Nº19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

En el mismo orden de cosas, la Ley Nº20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1º.

DÉCIMO: Respecto de la defensa en estudio, no desconoce este sentenciador los esfuerzos y la implementación de políticas de Estado vigentes hasta hoy en miras a perseguir la reparación del daño causado por agentes de Estado en el contexto del régimen vigente entre 1973 y 1990, recogidos a través de los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que refrendan e incorporan a las víctimas de violaciones a los llamados Derechos Humanos, cuya dimensión político-social, precisamente, apuntaba a la reparación y fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la responsabilidad del Estado frente a estas acciones, lo que también se ha traducido en las diversas persecuciones penales aún vigentes hasta el día de hoy.

En este escenario, es claro que la Ley Nº19.123 y las que se han dictado posteriormente han concedido una serie de beneficios, entre ellos los directamente pecuniarios, tanto en materia de salud como otros de carácter simbólico, los que se enmarcan dentro de las finalidades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, según su artículo 2 antes aludido, destinadas a “promover la reparación moral “de las víctimas.

Sin embargo, el hecho que estas prestaciones se hayan fijado por ley en beneficio de las aludidas víctimas gira en torno al concepto de reparación en todas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

sus dimensiones y, precisamente, dentro de la finalidad que se anota en el párrafo precedente, esto es, la reparación moral, hecho que no supone impedir el ejercicio de acciones civiles contra el Estado por parte del actor.

No consta que las prestaciones otorgadas supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se ejercen, lo que permite colegir, en principio, que la excepción reclamada por la demandada es improcedente.

A mayor abundamiento, las diversas prestaciones reconocidas a nivel legal no apuntan necesariamente a resarcir la dimensión moral del sujeto, sino también el ámbito estrictamente patrimonial y recuperar la pérdida de chances causadas por los actos de agentes estatales (lucro cesante), los que también se ven dirigidos a sus parientes, tales como los referidos al ámbito educacional y en materia de salud.

UNDECIMO: En definitiva, este sentenciador rechazará la excepción en estudio conforme al razonamiento precedente.

II-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

DUODECIMO: De manera subsidiaria a la excepción antes descrita, la parte demandada opuso la de prescripción extintiva de la acción civil, sea en los términos dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, o bien conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, en consideración a la data de los hechos que sirven de sustento de la acción en relación con la interposición y posterior notificación de la demanda.

DÉCIMOTERCERO: En relación con esta materia, la institución de la prescripción, en los términos del artículo 2492 del Código Civil, que precisamente se encuentra destinada a la consolidación de la *“seguridad de las posesiones y del crédito”*, tal como indica el mensaje de dicho cuerpo normativo.

En relación con esta premisa, el artículo 2493 del mismo cuerpo legal es claro en señalar que *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”* y que el artículo 2497 establece que *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Respecto a esta materia, conforme a la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, el artículo 2332 del Código Civil establece que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

DECIMOCUARTO: Que del relato vertido en la demanda, no aparece de manera clara la data de los hechos en relación con la fecha de la detención, pues enuncia como fechas de la detención en diciembre de 1973; aparecen fechas del año 1977 y luego el exilio ocurrido en 1976.

Sin perjuicio de lo anterior, el documento aportado en el folio 24, permite tener por acreditado que la detención se produjo el 18 de diciembre de 1973 y dejado en libertad por decreto de julio de 1975 y, además, con el informe psicológico protocolizado se ratifica lo anteriormente expuesto.

Al respecto, es necesario destacar el concepto de delito de lesa humanidad que se encuentra regulado en la Ley N°20.357, que en su artículo 1° indica que *“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias: 2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.*

El mismo articulado, luego de referirse a los delitos de lesa humanidad, al genocidio y crímenes de guerra, dispone en el artículo 40 que *“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”.*

En relación con lo expuesto, de los antecedentes acompañados en el folio 24, se describe y se desprende que los delitos cometidos el año 1973 respecto del demandante obedecieron a razones de índole política y que se encuentran vinculados a actos del Estado, en la forma que en dichos documentos se consignan latamente.

DECIMOQUINTO: En este análisis, y por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se desprende que rige, dentro de ese estándar normativo, lo dispuesto en artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ha sido ratificado por el Estado Chileno y se encuentra actualmente vigente, que dispone al efecto que *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”

Sobre el particular, y en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en establecer, por una parte, que *“que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”*, mientras que *“la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia “Velásquez Rodríguez vs Honduras”, dictada con fecha 21 de julio de 1989, párrafos 25 y 26. Consultado en <https://summa.cejil.org/es/entity/i0qbrq3n93utmx6r?page=9>; fecha de consulta 28.04.2022)

DECIMOSEXTO: Todo este razonamiento que se viene sosteniendo hasta acá permite llevar a la conclusión que, en primer término, en materia de Derecho Internacional, y reconocido a nivel interno, los llamados delitos de lesa humanidad gozan de la imprescriptibilidad de la acción penal.

En segundo lugar, sobre la base de la vulneración de los derechos que esas acciones lesivas han causado sobre sectores de la población, los estatutos internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, conceden un derecho a reparación integral, lo que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio patrimonial ocasionado y del que se requiera efectiva reparación.

En este aspecto, lo refrendado en el considerando anterior deja en evidencia que, frente a las dificultades en la persecución de estos hechos y la satisfacción del derecho a la “reparación integral”, resulta contraproducente entonces aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. De lo contrario, se vulneraría precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo, a juicio de este sentenciador, que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana y, por ende, reconocidos dentro del contexto internacional, dado su interés público, los que tiene como base principios de índole superior y que buscan la protección de los derechos más esenciales de cada ser humano.

Además, las normas de prescripción rigen esencialmente para relaciones entre privados y, en el caso de aplicarse en los términos del artículo 2497 del Código Civil, dicen relación con toda cuestión contractual y patrimonial en las que predomina el interés privado en las relaciones con el Estado y sus órganos.

Disponer su aplicación por sobre los tratados internacionales, además, colisiona con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir precisamente que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Este es un tema que, por cierto, ha sido reconocido ya por la Excm. Corte Suprema en diversas sentencias dictadas por la materia (Rol N°8318-2018; Rol N°29944-2019; Rol N°29.617-2019; Rol N°79.259-2020, entre otras).

DECIMOSEPTIMO: Por tanto, en relación con la alegación formulada por la demandada en análisis, tanto en su fundamento principal como subsidiario, deberá ser rechazada al estimar que la acción indemnizatoria en este tipo de materias es imprescriptible atendidos los fundamentos esgrimidos precedentemente.

III-EN CUANTO AL FONDO:

DÉCIMOCTAVO: Que la acción deducida por la parte demandante en el folio 1 de estos antecedentes buscan resarcir el perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado, reconocidos en el Informe respectivo, habiendo sido víctima de detenciones, golpizas y torturas por parte de agentes del Estado el año 1973, siendo liberado en 1975 y que originó su exilio en 1976.

De estos hechos, reclama el resarcimiento de las consecuencias que de ello derivaron en su esfera personal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

DÉCIMONOVENO: Que es un hecho de la causa que la parte demandada no ha controvertido la ocurrencia de los hechos denunciados, ni su connotación ni el contexto en que se promovieron aquellos, máxime si han sido considerados los hechos en que se sustenta la acción como parte de los cometidos por agentes del estado en contexto de la violación a los Derechos Humanos, de acuerdo a los informes acompañados a los autos en el folio 24, los que no fueron objetados de contrario.

Sin embargo, la demandada hace presente que el daño moral pretendido a base de esos hechos no se cuantifica a partir de un aspecto económico en particular, por lo que entiende que lo solicitado es excesivo, teniendo en consideración todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo a fin de obtener la aludida indemnización y, en subsidio de esa alegación, la regulación debe considerar los pagos ya recibidos y efectuados por el Estado, en armonía con los montos establecidos por los tribunales, los que ha recibido el actor durante años y que seguirá percibiendo con posterioridad.

VIGÉSIMO: En esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, a lo que el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

Se ha reconocido que, dentro de la clasificación del daño, atendida su naturaleza, se encuentra el llamado daño moral, que contempla la aflicción, el daño en los sentimientos e integridad espiritual de una persona, que no forman parte del aspecto patrimonial propiamente tal, y que de alguna forma se busca resarcir mediante la indemnización de perjuicios requerida.

Como perjuicio que es, debe ser probado precisamente por quien lo alega, conforme al artículo 1698 del Código Civil.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en este aspecto, se desprende especialmente del informe psicológico protocolizado acompañado en el folio 24, que Carlos Segundo Revecó Muñoz fue detenido el 17 de diciembre de 1973 por funcionarios de carabineros, liberado en 1975. Estuvo en diversos lugares de detención en, donde sufrió golpes de puño, patadas, golpes de corrientes, entre otros.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

Tal situación generó su exilio en 1976 a Estados Unidos, donde tuvo un difícil comienzo, además de las secuelas psicológica causadas en su persona, entre ellos el temor a los uniformados; insomnio, fobias, consumo de alcohol, lo que causó problemas familiares que no detalla. Precisa que regresó al país después de 36 años.

El informe resalta que tiene un evidente deterioro en el ámbito emocional, físico y psicosocial.

VIGESIMO SEGUNDO: Así las cosas, este sentenciador estima, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, que el demandante ha acreditado que los maltratos sufridos por este le ocasionaron perjuicio moral pues afectó su dimensión espiritual y psicológica en la forma descrita anteriormente.

Ahora, si bien es dable presumir que una consecuencia lógica de una experiencia traumática como la que relata el actor explican en el libelo pretensor consiste precisamente en un daño moral de tal entidad que provocó de manera indiscutible un cambio en el desarrollo personal y que permanece en su espiritualidad hasta el día de hoy, como todo perjuicio se requiere prueba para sostener, con precisión, la forma en que ese daño moral no solamente existe, sino que también cómo se ha manifestado o repercutido en los afectados, esto es, su intensidad, de tal manera que ello influirá en el quantum indemnizatorio a fijar.

Para los fines antes descritos, aparece que se cuenta solamente con este informe, que no detalla de manera exhaustiva los padecimientos sufridos por el actor, sin perjuicio de tener por acreditadas las consecuencias de la experiencia vivida con motivo de la detención que sufre entre 1973 y 1975.

En este acápite del razonamiento sobre el daño causado, es importante precisar que este antecedente es prueba idónea para pronunciarse sobre la existencia del daño y el quantum indemnizatorio por el que se debería acoger la acción deducida, los que refieren a los efectos particulares del actor, lo que permite dar un parámetro a este sentenciador dentro del cual determinar el monto indemnizatorio a conceder a la parte demandante, que de suyo es complejo al valorizar y poder reflejar la intensidad del padecimiento sufrido por éste frente a los hechos ilícitos ocurridos en el contexto de actuaciones de agentes estatales ocurrido en los periodos ya señalados.

VIGÉSIMO TERCERO: De acuerdo al razonamiento anterior, este sentenciador estima, dada la magnitud de los hechos sufridos por éste y el perjuicio moral causado se fijará prudencialmente en la suma que se indica a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1

continuación, donde influirá tanto la edad en la que sufrió este hecho como la forma como se generó una ruptura en el estilo de vida; los padecimientos sufridos y las secuelas psicológicas y espirituales que han sido permanentes en su estilo de vida, en particular la duración de su detención y el exilio al cual se vio forzado tras los hechos narrados.

De este modo, se colige que en relación al perjuicio moral ocasionado a Carlos Segundo Reveco Muñoz, se estima que este debe ser resarcido con la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)

VIGÉSIMO CUARTO: Respecto a la alegación de la demandada a fin de considerar los beneficios que la actora actualmente recibe y que fueron acreditados en autos para los efectos de fijar la indemnización que se concede, se rechazará por los mismos motivos consignados al desechar la excepción de reparación integral, en circunstancias que su argumento plantea, en cierto modo, el mismo efecto que se tuvo en consideración al esgrimir que la parte demandante habría sido resarcida de los perjuicios sufridos con las prestaciones legales concedidas en su favor y que actualmente percibe.

VIGÉSIMO QUINTO: En cuanto al reajuste e interés solicitado, será acogido sólo en cuanto se concederá el aludido reajuste de la suma fijada a título de indemnización conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el mes anterior al del pago efectivo y, a su vez, generará intereses corrientes, todo ello contado desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo.

VIGÉSIMO SEXTO: En cuanto a la condena en costas solicitada, no se accederá a la imposición de dicha carga procesal en circunstancias que la demandada no fue totalmente vencida y que, en todo caso, estima que ha litigado con fundamento plausible en el proceso.

VIGESIMO SÉPTIMO: Finalmente, el resto de la prueba acompañada al proceso por la demandante que no fuere analizados mayormente en el considerando sexto de este fallo, no gozan del mérito suficiente como para alterar lo resuelto precedentemente, al tratarse de antecedentes que no proporcionan otros hechos a considerar al momento de resolver.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

«RIT»

Foja: 1
sobre Derecho de Los Tratados y 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I-. Se rechaza la excepción de reparación integral alegada por la demandada.

II-. Se rechaza la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos duodécimo a decimoséptimo de esta sentencia.

III-. Se acoge la demanda interpuesta en el folio 1 de estos antecedentes, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de la suma de **\$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)**, a título de daño moral, respecto de Carlos Segundo Reveco Muñoz.

Dichas sumas deberán pagarse debidamente reajustadas y con los intereses respectivos de acuerdo con lo señalado en el considerando vigésimo quinto de esta sentencia.

IV-Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y por haber litigado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don Gastón Villagra Santander, juez titular del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, seis de Junio de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HPJVXXTKVCX

